

BOLETIN DE NOTICIAS

COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID

Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

BOLETÍN NÚMERO 167

FECHA: 15 de Abril de 2013

SUMARIO

| PAÍS | CONTENIDO | NºPG. |
|--------------------|--|--------------|
| Bolivia | El MAS, sus fortalezas, sus límites y sus desafíos | 2 |
| Colombia | La Marcha del 9 De Abril - Ética y Estética del Dolor | 4 |
| | Encuentro Estatal por la Paz y Audiencia Pública Internacional lanzan propuestas desde Madrid | 5 |
| Chile | En clave mapuche | 7 |
| El Salvador | Ayer como hoy, en contra del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea | 9 |
| Guatemala | Guatemala se desangra | 10 |
| | Una cuenta demasiado larga en Guatemala. Algunas implicaciones del juicio a Ríos Montt | 11 |
| Haití | Un país maquila que no tiene qué comer | 12 |
| Honduras | las rencillas entre la ultraderecha y la nueva Ley de Telecomunicaciones | 15 |
| México | El país está vendido a las empresas; no pueden ser socias del Gobierno: activista | 16 |
| Nicaragua | Contabilizan 17 mujeres asesinadas en el 2013 | 17 |
| Panamá | Nueva Ley vendería las fuentes de agua | 18 |
| Venezuela | Ahora, ¿chavismo sin Chávez? | 19 |

BOLIVIA

EL MAS, SUS FORTALEZAS, SUS LÍMITES Y SUS DESAFÍOS

El MAS ha celebrado este marzo sus 18 años de vida. En casi dos décadas, que no son nada frente a la naturaleza de lo que se quiere conquistar –la emancipación–, ésta organización política ya hizo historia. Cambio Bolivia. Sin embargo, tiene que corregir errores, hacer ajustes que después de todos estos años son necesarios y sobre todo ponerse a tono con el vertiginoso ritmo de su líder.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) es la organización política que, superando al MNR –partido que lideró una revolución nacional en 1952–, hizo un cambio radical de época en Bolivia. Sin embargo, a 18 años de su fundación lo que ha conquistado es todavía poco frente al enorme desafío –como ha señalado el presidente Evo Morales el 28 de marzo en Santa Cruz–, de conquistar la definitiva independencia y soberanía plurinacional.

La historia hay que verla con ojos grandes. Hay que evitar tener una visión cortoplacista y extremadamente determinada por las alegrías y las desesperanzas de toda coyuntura, para más bien apreciar lo que se está haciendo y las tareas pendientes desde una perspectiva más larga. Al MAS, por tanto, hay que analizarlo en sus orígenes, en el contexto nacional e internacional que nació, pero también en el cuadro de relación de fuerzas vigente en Bolivia y América Latina.

La idea de su nacimiento se fue asentando en las organizaciones campesinas –CSUTCB y Bartolina Sissa– y las ahora llamadas Comunidades Interculturales a fines de la década de los 80, y de no haber sido la maniobra del desaparecido Movimiento Bolivia Libre (MBL), que capturó la organización campesina, el Instrumento Político habría ingresado a la escena política en 1992, al recordarse los 500 años de invasión europea.

Lo hizo finalmente en 1995 en Santa Cruz, en medio de 10 años de dura hegemonía de los partidos neoliberales en el Estado y las ciudades, de una clase obrera golpeada y en proceso de desestructuración ideológica y orgánica, así como de una izquierda tradicional minoritaria y testimonial. Nada era fácil para las ideas emancipadoras, abandonadas y ridiculizadas por el grueso de la intelectualidad progresista que se pasó al gonismo .

Los pequeños focos de resistencia política se dieron desde los intentos del Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de prender la lucha armada, hasta participaciones electorales de una vieja izquierda que no encontraba el camino para levantarse de dos derrotas seguidas: el fracaso de la UDP y la caída del socialismo en Europa del Este.

Como el Estado y el campo político es una relación social, el neoliberalismo de la mano de los partidos de derecha, al que vergonzosamente se sumó el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), no encontró mayor obstáculo para desnacionalizar los recursos naturales, desmontar las empresas estatales, flexibilizar el trabajo, intentar subsumir de manera distinta a las comunidades campesinas, entregar el país al control político de los Estados Unidos y reforzar la colonialidad del poder.

Pero de la oscuridad surgió la luz. El movimiento indígena originario campesino fue avanzando a pasos acelerados en la construcción de su Instrumento Político, cuyo concepto partía de trascender, sin negar, la forma partido de organización, propia de la sociedad moderna, e incorporar como formas predominantes las lógicas comunitarias y de movimiento. A ese esfuerzo también se adherieron intelectuales y grupos de militantes de izquierda, de los cuales unos terminaron abandonando sus filas por el prejuicio colonial de no aceptar la dirección indígena campesina, por la penetración de ciertas ideas políticas neoliberales y por un infantilismo radical que parte de la convicción de que las revoluciones antimperialistas, anticoloniales y socialistas se hacen de la noche a la mañana.

La emergencia del Instrumento Político, que luego adquiriría el nombre de Movimiento Al Socialismo (MAS) se hace, por tanto, a partir de una crítica radical a la modernidad: funde la lucha social y la lucha política, cuestiona la idea de que unos estén llamados a gobernar y otros a obedecer, se propone la recuperación de los recursos naturales, llama a recuperar la soberanía mellada a título de

la lucha contra el narcotráfico, convoca a transformar el Estado, afirma que otro camino distinto al desarrollo capitalista es posible y se propone el objetivo de conquistar el poder para el pueblo.

El proceso ininterrumpido de avanzar hacia la materialización de esos y otros objetivos lo hace en paralelo: participa de las elecciones municipales de 1995 y de las siguientes de su misma naturaleza, así como en las elecciones generales de 1997 y 2002 –cuando está a menos de un punto del primero, el MNR- y finalmente en 2005 alcanza el triunfo electoral que jamás candidato y partido alguno lo hicieron en el pasado. Supera la barrera del 54% y en 2009 obtiene una victoria electoral en la primera elección dentro del Estado Plurinacional –que surgió del proceso constituyente- con un poco más del 64%.

Pero tampoco abandona la fuente de su fortaleza: la movilización político-social. Las asambleas en las comunidades y en los barrios se convierten en una escuela de formación política y de conciencia, al menos de manera clara en el período 1995 a 2008, donde la política se hace más allá de los centros institucionalizados del poder. Eso explica sus victorias políticas y militares sobre todos los intentos de la derecha nacional e internacional para terminar con el proceso.

Empero, esta fortaleza es mucho más difusa a partir de 2009 y se muestra más débil ahora. Una parte de la dirigencia y de la base creen haber tomado el cielo por asalto y van ingresando en un camino de particularismos y luchas faccionalistas que golpean la cohesión interna y afectan la imagen externa que se necesita para enfrentar tareas de mayor envergadura.

Es evidente que la forma creada –instrumento político asentado en los movimientos sociales- y los caminos elegidos –la participación electoral para transformar el Estado y la democracia desde adentro, pero también la presión social para construir poder desde afuera/adentro-, han sido las correctas para inaugurar un cambio de época. De otra manera no hubiera sido posible disputar y conquistar el poder, para ahora intentar construir otro radicalmente distinto.

Sin embargo, a 7 años de haber tomado el gobierno y empezado a construir un nuevo tipo de Estado, los problemas salen a la superficie: penetración de militantes de los partidos viejos de derecha que en un alto porcentaje no asumen el proyecto emancipador que acompaña al MAS-IPSP desde su fundación, “infiltración” de ideas liberales y capitalistas en un sector de la militancia y la dirigencia, prácticas reñidas con la ética que representa el gigantesco objetivo de construir una sociedad poscapitalista, el retorno a intereses particulares y corporativos que hacen perder el sentido común y universal. Todo ese se traduce en presiones que si bien no cuestionan el proceso, al mismo tiempo impiden su expansión hacia sectores sociales.

Ahora bien, ese protagonismo social hubiera caído al vacío sin el liderazgo de Evo Morales. La inteligencia forjada en años de resistencia al neoliberalismo y a la injerencia imperial, su enorme capacidad de sacrificio para estar –aun antes de ser diputado y luego presidente- en varios lugares en un solo día, su inobjetable ética política y su habilidad en la conducción han sido la garantía de las victorias conquistadas y un factor de extraordinario contrapeso a los problemas que le ocasiona el MAS. Si el MAS no fuera un dolor de cabeza, que a veces lo es, y se reinventara todos los días a la luz del desafío histórico de las fuerzas revolucionarias –emancipar al ser humano y al planeta-, le daría a su líder mayor energía de la que ya tiene. Quizá sea muy difícil seguir el ritmo del jefe del Estado Plurinacional, pero Morales necesita de una mayor consistencia en sus filas para encarar la meta de la independencia y soberanía plenas de Bolivia, así como para aportar en la misma dirección a la América Latina en marcha.

El MAS enfrenta varios problemas. No hay receta para remontar lo mal que se están haciendo algunas cosas y para consolidar lo bueno que se hizo en tan poco tiempo. Bolivia ya no es la misma. Quizá sea interesante recuperar algunas ideas y prácticas que inspiraron su fundación, resignificadas en una coyuntura donde el pueblo no es oposición sino poder, pero también en medio de una contraofensiva imperial que busca sacar tajada tras la muerte del líder latinoamericano Hugo Chávez.

Entonces, varios son los desafíos.

Uno de ellos quizá es volver a ser organización política y no partido en su sentido clásico. Esto quiere decir, articular la forma movimiento con lo mejor de la forma partido. Es asentarse

principalmente, aunque no únicamente, sobre la combinación articulada de movimientos sociales que recuperan su mirada universal y una vanguardia –de nuevo tipo- estructurada con los mejores hijos e hijas del pueblo. Estos se forman teóricamente en las escuelas y prácticamente en la lucha social y política.

Otro, es que el bloque indígena campesino originario haga el esfuerzo de incorporar a la clase obrera que se mira como tal y no como lo indígena que también es. Junto a eso, a sectores de clase media –tradicional y nueva- que tienen sus dudas sobre lo que está pasando, pero que tampoco quieren un retorno al pasado.

La cohesión ideológica se presenta como uno de sus mayores problemas y entonces como su mayor desafío. La dirigencia y la militancia deben hacer el esfuerzo de apegarse a la idea de que todo está dicho, para ir construyendo conocimiento todos los días. El Vivir Bien o del Socialismo Comunitario es una construcción cotidiana, en la que lo común es el elemento articulador.

El MAS ya hizo historia, como ha señalado Evo Morales en Santa Cruz. El desafío ahora es que continúe haciendo historia. La lucha por la emancipación no da lugar al descanso.

Fuente. Hugo Moldiz Mercado. Rebelión

COLOMBIA

LA MARCHA DEL 9 DE ABRIL - ÉTICA Y ESTÉTICA DEL DOLOR

Tal como estaba avisado y previsto, este nueve de abril de 2013 se celebró en las principales ciudades colombianas, a iniciativa del nuevo Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, una movilización ciudadana que hiciera de pronunciamiento incontestable a la manera de un mandato popular del pueblo soberano, para llevar a buen puerto las negociaciones de paz que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos adelanta con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba.

Lo cierto es que la Marcha por la Paz como se la conoció, superó en mucho las más optimistas expectativas. Y para frustración de los pequeños pero muy poderosos círculos de la ultraderecha nacional encabezada por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, en sólo Bogotá y partiendo de cálculos matemáticos serios, más de un millón de personas se volcaron a las calles en el más apoteósico pronunciamiento ciudadano que haya habido nunca en el país: más de un millón marchando todo el día, muchos después de haber cubierto largas y fatigosas jornadas desde las más distantes regiones. Todos, dando un lapidario ¡No! al mencionado ex presidente, que había agitado personalmente y a través de su influyente círculo de aduladores, la consigna dada al pueblo de “no ratificar” con su presencia ese acto por tratarse de una –como siempre- iniciativa del terrorismo en interés exclusivo suyo.

Hablando como analista política, el apoteósico acto de este nueve de abril es un indicador que debería significar el entierro político de Uribe Vélez como oráculo de una parte significativa del país, el fin de sus pretensiones de caudillo. No otra cosa lo impone tan abismal divorcio con el sin discusión principal interés popular del momento: el éxito de la negociación de paz con la guerrilla, una paz hay que acotarlo porque lo demanda la multitud en todas partes, “con justicia social”.

Fue grandioso lo vivido el martes 9 de abril hay que reiterarlo. Por motivos muy significativos. Esa abigarrada y tenaz muchedumbre que marchó en claro apoyo al proceso de paz con las FARC., agitó mediante las más originales y expresivas formas –dramatizaciones, danza, fotografía, escritos, poesía, canto y música- sus más sentidas aflicciones. Hubo una ética y una estética profunda y dolorida, que desde el arte y la vida expresó la verdad del sufrimiento. Del que se ha victimizado a millones con excusa de la confrontación.

Vida, verdad y arte fueron entonces los marchantes principales. Y no puede dejarse escamotear el dato cardinal que ellas referían: que los oprobios denunciados aludían fatalmente a algo que es

baldón para el gobierno y el poder militar dominante, el relato de los hijos desaparecidos, los hijos torturados, los hijos muertos, los masacrados. Pero no a manos de la fatalidad ni del acaso, sino del Estado; ejército y policía principalmente. Ninguna expresión vimos denunciando agravios similares por parte de la guerrilla y clamando justicia. Al contrario, esos indignados pendones de “Sin perdón ni olvido” remitían a espantables crímenes de Estado.

Por eso, la inequívoca lectura de la marcha de este 9 de abril no permite fraudes ni falsificaciones como ya desde el mismo momento de su realización lo estamos viendo tanto por parte de los medios de comunicación como del mismo presidente de la república -entusiasta marchante cuando vio que el hecho devenía arrollador- y del mando militar y policial. Y esta farsa no puede dejarse prosperar. Ella implica una distorsión histórica y mutilar de su proyección un suceso de la mayor relevancia para el futuro inmediato del país y para el bien común. Estamos hablando de que precisamente el 9 de abril, cuando de manera oficial se celebra en Colombia el día de las víctimas, se pretende escamotear por los mencionados poderes la queja y el drama de los victimizados –torpe pleonismo decir que del Estado-, para presentarlo como día de las víctimas sí, pero las causadas por la insurgencia. Absolviendo así, de una parte al Estado por miles de documentados crímenes de lesa humanidad, y de otra, más irritante aún, convirtiendo esta gran marcha y este día en acto de solidaridad con la fuerza pública causante de las violaciones por las que cientos de miles clamaron.

Entonces este magnífico nueve de abril no fue como burdamente lo quiere presentar el gobierno, homenaje a una nueva categoría de víctimas que quieren acuñar para desaparecer a las verdaderas. Esas son aquellas que en razón de su pertenencia a la fuerza pública y del riesgo ínsito en ello, resultan no víctimas porque esta categoría es privativa de la población civil no contendiente agredida por los armados, sino afectados en su vida o integridad por una contingencia del oficio escogido y libremente asumida. Y esta afirmación no es ideológica. Es elementalmente conceptual. ¿Acaso el Estado reconoce como víctimas a los rebeldes muertos, mutilados, ciegos, parapléjicos? He ahí entonces la razón esclarecedora.

Esa espuria lectura oficial, como una burla de la apoteósica manifestación de este nueve de abril, fue lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos cuando centró su “participación” en homenajear y honrar a las únicas víctimas que reconoce: no los dos mil jóvenes asesinados en los infames falsos positivos del ejército bajo su mando cuando se desempeñó como ministro de defensa, sino los militares y policías heridos o “caídos en combate”. A quienes es forzoso decirlo, se prodiga toda suerte de reconocimientos y toda clase de indemnizaciones y prestaciones como “víctimas del conflicto”. De los miles de campesinos asesinados por la fuerza pública en sus operaciones “génesis”, “centauro”, “cóndor”, “orión”, “espada de honor”, etc., nada; de los treinta mil detenidos desaparecidos, nada; de los cientos que reposan en las fosas comunes a resultas de esas operaciones en el Ariari –La Macarena, Granada, San Martín, Vista Hermosa, etc.-, nada. Sólo olvido y más olvido.

[Luz Marina López Espinosa-Rebelión](#)

ENCUENTRO ESTATAL POR LA PAZ Y AUDIENCIA PÚBLICA INTERNACIONAL LANZAN PROPUESTAS DESDE MADRID

Convocadas por la Plataforma Estatal por la Paz en Colombia, personas vinculadas a las organizaciones y colectivos que en los distintos territorios del Estado español trabajan en pro de la paz con justicia social en Colombia, así como exiliados y refugiados colombianos y miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, se dieron cita en el municipio de Rivas Vaciamadrid este 12 y 13 de abril para poner en común propuestas para la paz con las que contribuir al esfuerzo de construcción de acuerdos de la Mesa de Diálogos de La Habana y al Congreso por la Paz convocado por las organizaciones sociales y movimientos populares que convergen en la Ruta Social Común para la Paz, que se celebrará el 19 y 20 de abril en Bogotá.

Este Congreso Estatal partía de un trabajo previo que se ha venido desarrollando en las distintas comunidades autónomas del Estado español, donde se han realizado encuentros regionales para

articular propuestas, garantizando mecanismos de participación y haciendo un llamado muy amplio a participar activamente en la construcción de propuestas que enriquezcan desde la realidad de los exiliados o migrantes colombianos y las organizaciones de solidaridad internacionalista en el Estado español, la agenda de propuestas que permita vislumbrar un itinerario para la paz con justicia social en Colombia.

Este esfuerzo de coordinación y participación previo dio sus frutos en el Encuentro Estatal de Rivas Vaciamadrid, en el que se constituyeron tres comisiones de trabajo: una enfocada en propuestas hacia la Mesa de Diálogos de La Habana, otra centrada en propuestas hacia el trabajo de la solidaridad internacionalista y otra comisión de participación popular.

No a la impunidad

En el plenario donde se pusieron en común las conclusiones y propuestas de las distintas comisiones, que serán recogidas en un documento próximamente, se insistió en que el exilio colombiano es parte de las víctimas del Estado colombiano, que tienen derecho a plantear una altura de miras en la agenda de la negociación de paz. Y desde esta definición se reclamó la necesidad de aprender de las experiencias de distintos modelos de resolución de conflictos internos ya implementados: se mencionó el fracaso de los procesos en Centroamérica, donde en buena medida se tomó la inspiración del modelo de la Transición española, basado en la renuncia a pedir responsabilidades por los crímenes cometidos. Una de las reclamaciones más enfáticas del encuentro estatal español es el rechazo de la impunidad. Se habló también del modelo sudafricano, en el que se sacrificó la justicia a cambio de la verdad; y del modelo argentino, donde, por el contrario, se partió de la base de que no puede haber democracia sin justicia y por tanto había que perseguir a los criminales hasta el final, como una política cuyos frutos no fueron inmediatos, sino que han tenido que pasar décadas para que empiece a darse algo de justicia con respecto a los crímenes de la dictadura. No a la impunidad y rechazo de la llamada justicia transicional, donde a los responsables de crímenes se les ofrecen beneficios y perdón a cambio de confesiones. Cualquier paz basada en la impunidad será una paz falsa.

También se subrayó la necesidad de que la paz se base en la verdad, y se subrayó que no debe hurtársele al pueblo colombiano la verdad de los hechos que han venido sucediéndose y de sus responsables, bajo el argumento de la "reconciliación". Porque conocer la verdad es la garantía de que no se vuelvan a repetir y no se cierren las heridas en falso. "Como el fuego" - se dijo- "la verdad puede ser dolorosa al comienzo, pero también cauteriza".

La necesidad de que la paz se aborde con un enfoque de género se planteó como una urgencia en la medida en que las mujeres sufren especialmente la violencia y la pobreza, y no pueden estar excluidas de la agenda de construcción de la paz.

Los participantes en el Encuentro por la Paz denunciaron la connivencia de la Unión Europea y de los respectivos gobiernos con los crímenes de Estado funcionales a los intereses de las transnacionales asentadas en Colombia, y reclamaron la inmediata exclusión de las FARC de la "lista de organizaciones terroristas" de la Unión Europea.

Del Gobierno español reclamaron específicamente que acompañe el proceso de diálogos, que en este momento está siendo respaldado por Cuba, Venezuela, Noruega y Chile como países acompañantes, y la contribución activa del Gobierno español a los diálogos de paz.

Los participantes en el Encuentro Estatal por la Paz en Colombia acordaron realizar un segundo evento de ámbito estatal para el segundo semestre del año, así como promover un Foro de ámbito europeo siguiendo la metodología y el modelo propuesto por las delegaciones de paz de La Habana para poder recoger las propuestas de la población civil.

Audiencia Pública Internacional con el congresista Iván Cepeda

El 13 de abril por la tarde, una vez concluido el Encuentro, sus conclusiones fueron trasladadas a la Comisión de Paz del Congreso colombiano a través de una Audiencia Pública Internacional, en la que el congresista Iván Cepeda pudo escuchar a través de video-conferencia, el diagnóstico y las

propuestas de los participantes en el Encuentro estatal, en su triple dimensión: víctimas, exiliadas y activistas de la solidaridad internacional con Colombia.

Iván Cepeda afirmó que "el asunto de las víctimas y sus derechos es crucial para construir la paz", recalando que "no se trata de una mera negociación entre partes; no se trata de un regateo sobre cuánta verdad, cuánta justicia, cuánta reparación y cuántas garantías de no repetición" de los crímenes concede el Estado. "Es imprescindible que se reconozca el principio de bilateralidad: deben ser reconocidas todas las víctimas".

Cepeda recordó que el Acuerdo General que enmarca las negociaciones de La Habana dice que los ciudadanos tienen derecho a reunirse y enviar sus propuestas, tratando de que tengan formalidad y garantía. En ese sentido, agradeció la participación de una representante de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en España, como garante de la Audiencia Pública celebrada en Madrid y subrayó que la voz de los exiliados es fundamental para el proceso de paz.

Entre las propuestas trasladadas a la Comisión de Paz del Congreso colombiano desde la Audiencia Pública de Madrid, se planteó la necesidad de actuar sobre las causas estructurales de la guerra y acabar con la violencia contra las mujeres, se subrayó que el enfoque de género es indispensable. Se recordó que no estamos en un escenario de post-conflicto, sino que la guerra continúa y cada día se siguen generando víctimas. El llamado a un cese al fuego bilateral y la exclusión de las FARC-EP de la lista de organizaciones terroristas, así como la incorporación de las organizaciones insurgentes hasta ahora ausentes del actual proceso de paz, el ELN y el EPL, a la Mesa de Diálogo de La Habana, fueron reivindicaciones concretas de la solidaridad internacional con Colombia en el Estado español.

El congresista Iván Cepeda agradeció los aportes e hizo un llamado a multiplicar las audiencias públicas y los espacios de participación y construcción de propuestas para la paz con justicia social en Colombia.

[Adolfo Mena-Rebelión](#)

CHILE

EN CLAVE MAPUCHE

A fines de enero una comisión de solidaridad con el pueblo mapuche, integrada por chilenos y latinoamericanos, visitamos a los presos Héctor Llaitul y Ramón Llanquileo en el penal El Manzano, en las afueras de Concepción, y en la cárcel de Angol, unos 50 kilómetros al sur. El motivo de la visita fue denunciar la situación de los presos que llevaban 79 días en huelga de hambre, así como visibilizar la realidad de un pueblo perseguido en una Araucanía militarizada.

La comisión estaba integrada por cinco premios nacionales, el presidente de la Iglesia Evangélica Luterana, el presidente del Colegio Médico, un ex juez y un diplomático, dirigentes estudiantiles y sindicales, diversos intelectuales, la Pastoral Mapuche y la Comisión Ética contra la Tortura.

Llaitul y Llanquileo pertenecen a la Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, focalizada en la recuperación de tierras ancestrales en manos de corporaciones forestales y de latifundistas. Los presos pusieron fin a la huelga de hambre el 28 de enero, cuando la comitiva se comprometió a poner en pie una comisión nacional e internacional de observación de los derechos humanos del pueblo mapuche que visitará el país en octubre.

El 3 de enero se difundió la Cuarta Declaración de Historiadores respecto de la Cuestión Nacional Mapuche, firmada por cientos de intelectuales en la que recuerdan que los hechos de violencia, que a menudo se atribuyen sólo a los mapuches, "tienen su punto de partida en la mal llamada 'pacificación de la Araucanía' realizada por el Estado chileno entre las décadas de 1860 y 1880, en violación de los acuerdos concluidos con los mapuches después de lograda la Independencia (1825)".

Los historiadores señalan que el Estado de Chile ocupó a sangre y fuego la Araucanía y, utilizando los métodos más violentos y crueles, usurpó grandes extensiones de tierra indígena que subastó a

bajo precio o regaló a colonos chilenos y extranjeros, confinando a los mapuches en pequeñas y míseras reducciones. Debe recordarse que sólo a los militantes mapuches se les aplica la ley antiterrorista del régimen de Augusto Pinochet por acciones que nada tienen que ver con esa figura, como la quema de plantaciones o de camiones que transportan madera.

La solidaridad nacional ha crecido sostenidamente en Chile, en particular desde la huelga de hambre de Patricia Troncoso entre octubre de 2007 y enero de 2008. Destaca la solidaridad de los estudiantes secundarios con las comunidades mapuche, quienes han creado una comisión para trabajar los vínculos abajo-abajo entre ambos movimientos. Pero el apoyo internacional es escaso, por eso es necesario dar un salto para romper el cerco de desinformación que ha tejido la democracia chilena contra los que resisten el modelo.

Pese al buen ánimo de los presos mapuche y del conjunto del movimiento, es fácil dejarse ganar por el desánimo al comprobar las divisiones, reproches y críticas cruzados que se escuchan en las diversas instancias que agrupan al pueblo mapuche, ya sea en las comunidades rurales o en los espacios urbanos. No es cuestión de reproducir aquí los motivos y argumentos de la fragmentación del mundo mapuche en resistencia, sino apenas constar un hecho y, sobre todo, intentar hacer una lectura distinta a la que realizan las academias y los partidos políticos.

Lo primero es constar que no hay ninguna organización, ni siquiera un espacio de coordinación, que aglutine a todo el pueblo mapuche. Se trata de un caso bien diferente de los que conocemos en el mundo andino, donde los quichuas ecuatorianos y los quechuas y aymaras bolivianos (además de los pueblos de tierras bajas) han construido grandes organizaciones representativas de sus pueblos. ¿Se trata de una ventaja o una desventaja del pueblo mapuche?

Lo segundo es que desde la década de 1990 nuevas generaciones han creado un sinfín de organizaciones urbanas y rurales, en lo que el historiador Gabriel Salazar denomina la sexta época de la guerra mapuche, iniciada en 1981 cuando arreciaron las protestas callejeras contra la dictadura. Esta nueva generación entronca con una larga historia que dice que el pueblo mapuche fue el único de este continente que derrotó a los incas y a los españoles, a quienes forzó a detenerse al norte del río Bio Bio.

Desde que fundaron el Consejo de Todas las Tierras y más tarde la Coordinadora Arauco Malleco, organización que se define autónoma y anticapitalista, nacieron decenas de organizaciones: de estudiantes, de mujeres, de jóvenes, deportivas, culturales, de historiadores, de pescadores, de comunicación; pequeñas y locales, con vínculos cara a cara, sin llegar a crear una gran organización que aglutine a todos.

Tercero, hacen política de una manera diferente, que se traduce en soberanía o autonomía, como bien recuerda Gabriel Salazar. No se miran en el espejo del Estado, ni para conquistarlo ni para construir organizaciones a su imagen y semejanza. Quizá, seguramente, porque el Estado siempre fue algo externo al pueblo mapuche. Nunca se sintieron, ni se sienten, chilenos. No enarbolan la bandera de Chile sino la propia, la que heredaron de sus antepasados. Su lucha se referencia en una memoria de sí mismo casi sin paragón en el mundo, en la que se estratifican no sólo una sino cinco a seis épocas de guerra a lo largo de seis o más siglos de historia (Movimientos sociales en Chile, Gabriel Salazar, p. 119).

Llegados a este punto, podríamos decir: pese a la fragmentación, resisten. ¿No será al revés? Porque no crearon un aparato único (estadocéntrico) es que siguen siendo uno de los pueblos que resisten la cooptación de derechas e izquierdas. ¿Será cierto que la unidad y homogeneización facilitan la domesticación de los movimientos antisistémicos? ¿Tendrá razón el EZLN? La historia del pueblo mapuche enseña que para luchar, y para vencer, hace falta voluntad comunitaria de lucha; pero no un aparato que encumbre caudillos, anule las diferencias y las autonomías.

Vencerán

Fuente: Raúl Zibechi. La Jornada

EL SALVADOR

AYER COMO HOY, EN CONTRA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN CON LA UNIÓN EUROPEA

Hace exactamente cuatro años, gracias a una invitación del Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador (CDC) tuve la oportunidad de participar como expositora en un encuentro de movimientos sociales centroamericanos en Tegucigalpa, reunidos para definir y coordinar estrategias de resistencia en contra de la aprobación del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (AdA).

Revisando mis anotaciones, encuentro que fueron tres razones principales en base a las cuales justifiqué en esa oportunidad, mi oposición al AdA.

En primer lugar, el AdA es la versión europea del CAFTA. Esto significa que forma parte de la estrategia de expansión global del Capital que tiene como sus principales objetivos, el control transnacional de los sectores estratégicos de la región centroamericana (agua, energía, servicios públicos, servicios financieros, pensiones, tierra, recursos marinos, medicamentos, etc.) y obtener mejores condiciones de rentabilidad para las empresas europeas en las compras gubernamentales, concesiones de obras públicas y mayor protección de patentes. Este es el espíritu de la AdA, el cual sin embargo, se mantiene oculto gracias al estéril debate que sobre el tema comercial impone tanto la agenda informativa de los medios de comunicación, como las oficinas de los Ministerios de Economía. En este falso debate, el análisis de este instrumento se reduce a la constatación de las obvias asimetrías existentes entre El Salvador y Europa, y la capacidad (o incapacidad) de las empresas nacionales de poder aprovechar “las oportunidades” para aumentar sus exportaciones hacia ese destino.

En segundo lugar, aun cuando el tema comercial no es el tema principal del AdA, es obvio que, pese a las asimetrías existentes, las exportaciones desde El Salvador a Europa aumentarán. Sin embargo, no serán exportaciones de pequeñas o medianas empresas nacionales, sino que serán exportaciones realizadas principalmente por empresas europeas radicadas en El Salvador (como la empresa atunera Calvo) que aprovecharán las ventajas del AdA para que sus mercancías entren a los mercados europeos sin pagar aranceles. Esta misma tendencia se observará en las importaciones de las grandes empresas comerciales salvadoreñas (como Siman o Superselectos) y/o franquicias europeas (como Zara o MNG) que podrán aumentar las importaciones de mercancías libres de impuestos desde Europa, para ampliar sus ventas al mercado nacional y desplazar todavía más a la ya debilitada producción salvadoreña. En ambos casos, las supuestas ventajas del mayor flujo comercial se concentrarán en un reducido grupo de empresas y personas.

En tercer lugar, la denominada cooperación para el desarrollo que acompaña al AdA es el envoltorio de regalo que recubre la expoliación de recursos y bienes públicos que pretenden realizar las empresas transnacionales europeas con la complicidad de los gobiernos centroamericanos, que están actuando como “las malinches” de esta segunda conquista. Este ofrecimiento cumple el mismo papel que en 1492 cumplieron los espejos y cristales de colores, que los conquistadores entregaron a los indígenas a cambio de sus riquezas y que costaron a los pueblos amerindios más de 300 años de opresión y de saqueo. Adicionalmente, debe denunciarse el intenso lobby que la cooperación europea está realizando ante las organizaciones no gubernamentales centroamericanas (que dependen de esta cooperación para el financiamiento de sus proyectos y para el pago de sus planillas), y que está logrando el efecto de cooptar sus posturas críticas frente al AdA y/o dividir al movimiento social frente al acuerdo.

Cuatro años después, mis convicciones sobre este Acuerdo siguen siendo las mismas, pero el contexto en que se presenta la solicitud de ratificación a la Asamblea Legislativa es más desfavorable para los intereses del pueblo salvadoreño que el existente hace apenas cuatro años.

La solicitud de ratificación proviene ahora de un gobierno que se autodefine de izquierda, que goza de un alto nivel de popularidad en las encuestas de opinión y está liderada por funcionarios que hace menos de cuatro años se oponían al AdA. Y esto, puede no solo confundir al movimiento popular sino que amenaza con desmovilizar las protestas de las organizaciones populares y laborales en contra del AdA, en especial, las de aquellas organizaciones que están identificadas con los

programas sociales gubernamentales, y que no quieren “hacerle olas” a este gobierno, de cara al proceso electoral de 2014.

Pero además, esta solicitud de ratificación se da en el contexto de una estrategia más agresiva de los capitales europeos y de sus gobiernos, para realizar un segundo desembarco en Centroamérica, que permita a los capitales europeos un refugio temporal frente a la recesión y la crisis de la deuda en la zona euro. La salida de capital de España en 2012 fue de 247, 172. 7 millones de euros, 620 veces más de las salidas de capital en 2011. Otro tanto parecido está ocurriendo en Italia. No en vano se sabe que son los capitales españoles e italianos son los que tiene mayor interés en participar del festín de las concesiones de obras y bienes públicos en Centroamérica que se está preparando para los próximos años, en el marco de los Asocios Público Privados que se están promoviendo como la nueva panacea al bajo crecimiento y subdesarrollo.

Esto es parte de la gran paradoja de la izquierda en América Latina: criticar y/o resistir a las políticas de derecha cuando las hacen los gobiernos y partidos de derecha; justificar y/o tolerar las políticas de derecha cuando las hacen gobiernos y partidos de izquierda. ¿Será aún tiempo que la izquierda salvadoreña tome conciencia del error histórico de mantenerse en esta paradoja?

Fuente: Julia Evelyn Martínez. Rebelión

GUATEMALA

GUATEMALA SE DESANGRA

Hace ya unas cuentas décadas Eduardo Galeano hablaba de las venas abiertas de América Latina, haciendo referencia a la historia de expolio, imposición, colonialismo y violencia a la que ha sido sometida esta región, la más desigual del planeta, desde tiempos de la conquista. De esta manera, Galeano explicaba que América Latina, a lo largo de los últimos 5 siglos largos, siempre ha sido vista por los poderes globales como un territorio del que extraer el máximo beneficio, sin capacidad de decisión propia ni soberanía, y en el que la pobreza y las grandes brechas sociales no eran sino efectos colaterales de su función subalterna en el entramado internacional. Una región, por tanto, con las venas abiertas, desangrándose para beneficio de unos pocos.

Hoy, en esta primera década del siglo XXI, podríamos quizá hacer otra lectura del subcontinente. Una lectura más positiva, en la que destacaríamos que el ¡ya basta! que retumbó en 1992 con motivo de la celebración del genocidio indio –descubrimiento de América dicen algunos- se ha transformado en procesos políticos y sociales que enfrentan esta caracterización histórica. Así, es indudable que la región ha ganado en soberanía y en integración, plantando cara a los agentes y a las políticas neoliberales, e incluso proponiendo alternativas emancipadoras que superen en actual sistema vigente. Hoy por tanto, existen fuerzas, poderes, agendas que se empeñan de manera denodada en frenar la sangría, en cicatrizar las venas abiertas de un continente enrabiado y digno (un recuerdo especial para Hugo Chávez, el mejor cirujano que ha tenido América en las últimas décadas).

No obstante, estos procesos alternativos, aún sólidos e ilusionantes, se enfrentan a un gigante despiadado y a unas estructuras forjadas a fuego a lo largo de la historia. Así, América Latina se sigue desangrando, aunque hoy contamos con la esperanza de poder revertir esta situación. Esa misma ilusión, esa misma esperanza que recorre la región también ha llegado a países especialmente castigados como Guatemala, donde sus venas todavía están abiertas en canal. Porque en Guatemala la sangre ha fluido a borbotones durante el conflicto armado (1960-1996). Porque en Guatemala, a día de hoy, la sangre sigue fluyendo a borbotones.

Y esto es así porque la visión colonialista, racista, antidemocrática e interesada de las nuevas alianzas del poder (gobiernos militares, empresas transnacionales, grupos de interés nacionales, narcotráfico) no ha cambiado ni un ápice, y no están dispuestos a que estos vientos de emancipación, a que estos deseos de cicatrización se asienten en Guatemala. Frente a ello, se oponen tajantemente a la creciente contestación de los pueblos y movimientos sociales, así como a las propuestas alternativas que han situado en su agenda para el conjunto de las mayorías sociales.

Ahí precisamente se sitúa la estrategia de generar miedo y amedrentar a los activistas sociales y políticos, de criminalizar la protesta, y de usar la violencia para sostener dicha estrategia.

En este marco se sitúa el asesinato el pasado 18 de marzo de líder comunitario del Pueblo Xinca Marcos Ucelo, después de ser secuestrado junto a otros tres compañeros, al regreso de una consulta comunitaria. Se trata de activistas reconocidos que han participado en grandes movilizaciones como la Marcha Indígena y Campesina, y que luchan por el reconocimiento de la propiedad comunal de sus tierras, frente a los intereses empresariales. Otro ejemplo de esta estrategia, de los muchos que hay, es el injusto encarcelamiento del Rubén Herrera, amigo personal y dirigente de la Asamblea Departamental de Huehuetenango, acusado de terrorismo y otras lindezas simplemente por oponerse a la instauración sin consulta popular de una central hidroeléctrica gallega. Intereses empresariales y políticos se mezclan en este hecho -como en tantos otros-, y dan lugar a un comunitario muerto, a un estado de sitio declarado...y a más de trece detenidos, por supuesto de las comunidades. Rubén ha sido el último, cuando el resto ya ha salido de la cárcel por falta de pruebas.

Negocio, expolio, miedo, amedrentamiento, violencia salvaje, gubernamental o empresarial. Esta es la propuesta oficial. El presidente, Otto Pérez Molina, así lo dijo en su visita a Madrid. Traduciéndole a un discurso inteligible, esto fue lo que dijo: "Vengan empresas españolas, que el país está en venta. Ofrecemos seguridad jurídica, legal y social a las inversiones, cueste lo que cueste". Y cueste lo que cueste son muertes, como la de Marcos; y detenciones, como la de Rubén.

Pero Rubén sabe, como sabía Marcos, y como saben los pueblos y los sectores populares de Guatemala, que el miedo que quieren generar es proporcional al miedo que el poder atesora. Porque los vientos de cambio ya han llegado, un nuevo Baqtún está en marcha, y las venas de este atribulado país van a ser cicatrizadas. Porque se debe, porque se puede. Nadie puede poner freno al viento, y en Guatemala tampoco. ¡Ánimo Rubén!

Fuente: Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Rebelión

UNA CUENTA DEMASIADO LARGA EN GUATEMALA. ALGUNAS IMPLICACIONES DEL JUICIO A RÍOS MONTT

Los intensos testimonios que se han escuchado en el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt (jefe de Estado en el período 82-83) y José Mauricio Rodríguez Sánchez (jefe de la temida sección de inteligencia militar del ejército, la G2), son parte de una larga cadena de dolores que aún no han sanado.

Contrario a las posiciones negacionistas provenientes de personas afines al ejército, pero también de sectores conservadores de derecha, este juicio permite apreciar que las heridas producidas por las atrocidades ocurridas durante el conflicto armado interno en Guatemala siguen abiertas y pendientes.

¿Borrón y cuenta nueva? De ninguna manera. La cuenta es demasiado larga.

Es tan larga que los vencedores de ayer tienen cierto aire de familia con los vencedores de hoy. El presidente Otto Pérez Molina y otros militares que tuvieron participación en el conflicto son parte del gobierno actual en Guatemala. Las promesas de mano dura sobre una población atemorizada por la delincuencia, la desmemoria y la falta de opciones populares reales les dieron la victoria.

Es por ello que se debe reconocer la persistencia de las víctimas y las organizaciones acompañantes que a través de un sostenido esfuerzo han hecho que se pueda llevar a juicio a estos militares, a pesar de los obstáculos que han encontrado y que hacen que sólo hasta hoy, después de 30 años de lo sucedido, estos militares puedan ser juzgados por la responsabilidad que tuvieron.

Es larga la cuenta porque este juicio, que también existe como un proceso social, muestra que la polarización en el país se sigue dando entre los que ejecutaron y apoyaron el genocidio y los delitos de lesa humanidad (y que ahora lo niegan) y las víctimas que reclaman justicia. Polarización que resulta todavía más trágica porque una de las estrategias que utilizó el ejército y mayores consecuencias tuvo fue la de haber usado a miembros de las comunidades indígenas golpeadas por

la represión a tener participación en lo ocurrido (las tristes Patrullas de Autodefensa Civil). En realidad, este juicio no crea posiciones polarizadas como algunos señalan, sino destaca las profundas divisiones que el conflicto agudizó en la sociedad guatemalteca y que permanecen.

Pero sobre todo, esta cuenta es larga por todo el dolor acumulado sobre las víctimas. Como se evidencia en los testimonios que se escuchan en el juicio (pero también en miles de testimonios consignados en informes y otros que circulan en cuerpos marcados por el recuerdo), está el dolor que experimentaron las víctimas directas en aquellos terribles momentos en que fueron asesinadas, violadas, secuestradas y desaparecidas.

Está también el dolor de los familiares que pudieron compartir ese dolor por asistir como testigos al suplicio causado o por la incertidumbre y agonía que sintieron al saber que sus seres queridos habían sido asesinados o desaparecidos.

También está el dolor más sutil, pero no por ello menos presente, que se transmite en gestos que van desde las narraciones hechas hasta los silencios, los vacíos, las ausencias, las tristezas sin nombrar y que afectan a quienes aún no habían nacido en los momentos en que el dolor se estaba produciendo. Aunque hay algún conocimiento respecto a esta situación, los efectos transgeneracionales que se producen a nivel individual y a nivel social son parte de las deudas pendientes que siguen produciendo sus nocivos efectos en el país.

Finalmente, este juicio que muestra que las heridas y fracturas en la vida social guatemalteca están abiertas y expuestas, es un paso en el largo camino hacia la justicia que se viene recorriendo desde hace ya bastante tiempo.

Ojalá que este juicio sea también una oportunidad para reexaminar el pasado y la memoria, hacerla actual y que anime las resistencias y luchas presentes.

Fuente: Mariano González. Rebelión

HAITÍ

UN PAÍS MAQUILA QUE NO TIENE QUÉ COMER

Los “amigos de Haití” y el gobierno haitiano cambian la producción de alimentos por la instalación de maquilas con salarios de hambre

Hace 30 años, los asesores haitianos y estadounidenses del dictador Jean-Claude Duvalier compartían la misma visión del futuro de Haití: el país debería ser el “Taiwán de El Caribe”. Es decir: un gigantesco complejo de maquilas que garantizaría salarios de miseria en las industrias de textil, electrónica y de fabricación de implementos de béisbol de Estados Unidos. La ‘reconstrucción’ del país va por el mismo camino.

Tres décadas después de esta visión, el gobierno de Michel Martelly, la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití (CIRH), el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otras instituciones financieras internacionales, George Soros y otros actores implicados en la ‘reconstrucción’ de Haití planean lograr que 200 o quizás 500 mil obreras y obreros haitianos trabajen con salarios de hambre en las “zonas francas” y en los “parques industriales” (eufemismo para nombrar las maquilas donde se ensamblan piezas importadas libres de impuestos, que a su vez serán re-exportadas sin pagar impuestos).

Hay un problema

“Hay un problema en mi país: trabajo en una fábrica hace 25 años y todavía no tengo casa propia”, le confió Evelyne Pierre-Paul a Ayiti Kale Je (AKJ). Evelyne tiene 50 años y tres hijos. Antes del terremoto de enero de 2010 vivía en un cuarto de alquiler. Veintidós meses después del seísmo, ella y su familia continúan hacinados en una tienda en uno de los sórdidos campos de refugiados de Puerto Príncipe. Su salario es de 225 gourdes (4,69 \$US) por día. Esa suma no alcanza para cubrir

ni siquiera la mitad de los gastos básicos de una familia. Por eso, no todos los hijos de Evelyne Pierre-Paul pueden ir a la escuela. “El día de pago, después de cubrir las deudas no me queda casi nada”, explica Evelyn, que cose vestidos para One World Apparel, una fábrica gigantesca donde las obreras y obreros cortan y cosen vestidos para K-Mart, Wal-Mart y algunas compañías que venden uniformes.

Según Ayiti Kale Je (AKJ), en 2011, había en las maquilas haitianas cerca de 29 mil trabajadores, de los cuales el 65% son mujeres, que cortaban y cosían vestidos para Banana Republic, Gap, Gildan Activewear, Levis y otras marcas. La agencia haitiana señala que su salario es más bajo que en los tiempos de la dictadura de “Bebé Doc”.

El estudio Time for a «High-Road» Approach to EPZ Development in Haiti, de Yasmine Shamsie, señala que el modelo de las zonas francas donde funcionan las maquilas ha incrementado la concentración de la riqueza y de las desigualdades entre las regiones en Haití, ha contribuido a aumentar el precio de la alimentación y la vivienda, y ha impulsado el crecimiento de cordones de miseria alrededor de las fábricas porque los salarios excesivamente bajos impiden que las obreras y obreros puedan pagar una vivienda digna y segura.

El Parque Industrial Caracol

En octubre de 2012 el gobierno haitiano y algunas autoridades de los “países amigos de Haití” vieron su sueño hacerse realidad durante la inauguración del Parque Industrial Caracol (PIC) que, según ellos, creará 20 mil –tal vez 65 mil- empleos. El PIC fue presentado como la “joya de la corona” de la ‘reconstrucción’ después de la catástrofe de enero del 2010.

El presidente Michel Martelly aprovechó la ocasión para repetir una vez más que “Haití es un país abierto a los negocios”. Multimillonarios, actores y gobernantes extranjeros aplaudieron al presidente. Los folletos de promoción de Caracol prometían que el parque haría de Haití un país “competitivo a nivel mundial, sin comprometer los estándares laborales y ambientales”.

El PIC es un proyecto de los gobiernos de Haití, Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La agencia haitiana de información Ayiti Kale Je (AKJ) revela que, un año después de iniciar operaciones, 1.388 personas trabajan en el Parque Industrial Caracol, entre estos 26 personas de otros países y 24 agentes de seguridad. La maquila coreana que emplea el mayor número de personas es S&H Global, una filial de SAE-A Trading. Esta maquila ensambla ropa para marcas estadounidenses como JC Penny, WalMart y otras.

Según el New York Times, antes de que se firmara el acuerdo para que la fábrica coreana se estableciera en Caracol, la AFL–CIO, la mayor federación de sindicatos de los Estados Unidos, instó a los funcionarios estadounidenses e internacionales a reconsiderar abrir las puertas de Caracol a SAE-A Trading y, les envió información detallada sobre la “represión antisindical atroz” que Sae-A llevó a cabo en Guatemala, que incluyó “actos de violencia e intimidación”. En la información, Homero Fuentes, quien supervisa las fábricas para los minoristas estadounidenses, clasifica a Sae-A como “uno de los violadores más importantes de las normas laborales.”.

La advertencia de AFL–CIO fue desoída. Como en la mayoría de maquilas, en Caracol, S&H Global ha contratado sobre todo a mujeres jóvenes. A pesar de que el salario mínimo en Haití es de 300 gourdes por día, la maquila coreana paga 200 gourdes (4,75 \$ US). AKJ pudo establecer que una obrera puede gastar 61 gourdes en transporte y 82 en alimentación. Sólo le restarían 57 gourdes o 1,36 \$ US para los gastos de su familia.

Una de las obreras entrevistadas por AKJ declaró: “Nos tratan como a bestias. Nos gritan. Los alimentos que nos venden están mal preparados, solo nos dan agua caliente, trabajamos sin cubreboca, el polvo nos entra en la nariz. Los supervisores no nos respetan, no nos consideran como a seres humanos, nos golpean con los vestidos que estamos cosiendo”. A pesar de que SAE-A asegura respetar el código de trabajo de Haití, se negó a recibir a un grupo de reporteros de AKJ en su fábrica en Caracol.

Compitiendo con China

El economista haitiano y profesor de l'Université d'État de Haïti Frédérick Gérald Chéry explica que el salario pagado en las fábricas de ensamblaje, con la complicidad del gobierno haitiano, no contribuye al crecimiento de la economía. “El salario mínimo se debe fijar en términos de la canasta básica y de los precios de los productos locales. No podemos empujar a un obrero a comprar maíz importado de Estados Unidos”, advierte Chéry.

La exministra de Asuntos Sociales, Josépha Raymond Gauthier, reconoció en una entrevista que los salarios son bajos, pero se apresuró a repetir la misma justificación que enarbolan los dueños de las ensambladoras. “Alguien que trabaja (en una maquila) no va a volverse rico de la noche a la mañana. Pero el que no trabaja, no tiene ninguna esperanza”.

Los que trabajan en las maquilas haitianas tampoco pueden hacerse muchas esperanzas. Todas las compañías que se instalarán en el PIC se beneficiarán de incentivos fiscales, y las maquilas de ropa tienen privilegios suplementarios en virtud de la ley HELP (Haiti Economic Lift Program, por sus siglas en inglés), aprobada después del terremoto por el Congreso de Estados Unidos. La ley triplica las cuotas de exoneración de aduana para las exportaciones de ropa fabricada en Haití a los Estados Unidos hasta el año 2020. Como contrapartida, Haití se comprometió a garantizar que los salarios permanecerán a un nivel “suficientemente” bajo. De hecho, el informe “Private Sector Development in Haiti: Opportunities for Investment, Job Creation and Growth The World”, preparado por el Banco Mundial y el BID para el Forum Económico Mundial de Davos en 2011, señala que para ese año el costo de la mano de obra en Haití era “perfectamente competitivo con el de China”.

Desplazamiento a cambio de salarios de hambre

Para construir el Parque Industrial Caracol, el gobierno haitiano y sus socios (BID y el Departamento de Estado de Estados Unidos) desplazaron a 366 familias que explotaban 250 hectáreas de tierras fértiles. La producción de estas parcelas aseguraba la sobrevivencia de cerca de 2.500 personas y el trabajo de 750 agricultores. Desde noviembre de 2011, el espacio que ocupaban los agricultores fue asfaltado con el fin de construir hangares en donde supuestamente funcionarán las maquilas.

Las autoridades haitianas han declarado que han indemnizado a los agricultores y que han encontrado un espacio para reubicarlos cerca de Glaudine. Pero, después de dos años, los agricultores se muestran escépticos. Recuerdan que en la zona de Ouanaminthe, donde se construyó el Parque Industrial CODEVI, en 2003, todavía hay agricultores expulsados que no han recibido la tierra que les prometieron.

Antes Caracol era el granero del departamento del Noreste. Pero “en este momento escasean los productos agrícolas, vivimos en la miseria”, señaló a AKJ el agricultor expulsado Breus Wilcien. Vilsaint Joseph, una de las autoridades de la comunidad, recuerda: “Antes, cuando se recogía la cosecha, los camiones salían cargados de maíz y frijoles hacia Puerto Príncipe”.

Aunque cualquier persona con tres dedos de frente, el gobierno de Martelly y los onerosos estudios de las agencias de cooperación y las Naciones Unidas identifican la producción de alimentos y la seguridad alimentaria como una de las prioridades del país, la “reconstrucción” financiada y apoyada por actores extranjeros continúa dando prioridad a la visión de Haití como “país-maquila” en detrimento del apoyo a los pequeños agricultores.

En una entrevista realizada por el New York Times en 2012, José Agustín Aguerre, director del BID en Haití (entidad que financia el parque industrial Caracol), reconoció que “crear una industria de maquila de ropa es una opción que todo el mundo intenta evitar”. El muy bien pagado funcionario Aguerre consideró esta opción “como un último recurso”. Pero aseguró que la maquila es “una buena oportunidad” para Haití, “aunque los salarios son bajos”. Y para finalizar declaró: “Sí, mañana las compañías podrían irse porque encuentran mejores lugares. Pero todo el mundo piensa que esta apuesta valía la pena (para Haití)”. Aguerre se refería a “todo el mundo” en el BID.

Fuente: Otramérica

HONDURAS

LAS RENCILLAS ENTRE LA ULTRADERECHA Y LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES

A inicios del mes de diciembre del año pasado, Porfirio (Pepe) Lobo denunció un complot para derrocarlo "como Zelaya", señalando a los diarios El Heraldo y La Prensa, pertenecientes a Jorge Canahuati Larach, entre los supuestos incitadores de su defenestración.

Es de conocimiento público, que en Honduras actualmente existe una pugna visceral entre grupos de la ultraderecha para controlar el país, especialmente después del golpe de estado del año 2009. Los viejos socios se enfrentan a raíz del masivo fraude electoral cometido en las elecciones del pasado noviembre, donde el actual Presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, ha sido ungido heredero de la casa presidencial.

El despliegue de la denuncia de Lobo en relación al supuesto complot fue la antesala del golpe perpetrado por el Poder Legislativo al Judicial, cuando fueron destituidos por el Congreso nacional cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que semanas antes habían emitido el fallo de inconstitucionalidad de la Ley de Regiones Especiales para el Desarrollo (RED) conocida como Ciudades Modelo, iniciativa que se perfila como un proyecto neocolonial, y no es mas que un pingue negocio para la élite de poder nacional e inversionistas extranjeros.

Canahuati Larach, *honorable* miembro de la siniestra SIP (Sociedad interamericana de Prensa) jugó un enorme papel en el golpe del 2009 en contra de Manuel Zelaya. A los pocos meses de haber asumido Zelaya la presidencia, Canahuati perdió su lucrativo negocio de venta sin licitación de medicinas y armas al Estado. A partir de los seis primeros meses del mandato de Zelaya, los periódicos de Canahuati iniciaran una campaña de desestabilización, incrementada a medida del acercamiento de Honduras al ALBA y PETROCARIBE.

La SIP y sus miembros en el presente siglo se han destacado por sus campañas de desinformación e intimidación en contra de gobiernos populares, logrando desfigurar el derecho a la libre expresión, al utilizarlo como un arma de doble filo, mas dirigida a proteger los intereses de las minorías que han venido saqueando a América Latina.

La administración Lobo, radios comunitarias y el derecho a libre expresión.

A finales de enero del año 2001, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) efectuó una consulta electrónica que duró una semana con el propósito de emitir una resolución mediante la cual se pretendía suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias para emisoras radiales de baja potencia, alegando la existencia de un alto grado de saturación en la ocupación del espectro radioeléctrico dentro de la banda 88–108 MHz.

Durante el período posterior al golpe denominado el "intinerato" y de la actual administración, las radios comunitarias en Honduras han sufrido de persecución estatal. A inicios del año 2010, la Radio Faluma Bimetu de Triunfo de la Cruz fue incendiada por desconocidos, ante su defensa acérrima del territorio ancestral de esa comunidad. Los miembros de la Radio Zacate Grande, han sido frecuentemente hostilizados por las autoridades, además de los integrantes de La Voz Lenca. Se suma a estas represiones la ejecución de comunicadores sociales, crímenes que nunca han sido investigados de forma fehaciente.

En los últimos tres años, el absurdo incremento de la violencia en Honduras y el estado fallido inducido en el cual sobrevivimos, ha dado lugar a una mordaza informativa, que en la mayoría de los casos es impulsado por los propietarios de los latifundios mediáticos. Los pocos medios de comunicación independientes existentes, suelen acallarse ya sea por temor o por el efecto de las dádivas estatales.

La nueva Ley de Telecomunicaciones y su presunta efectividad

En Honduras puede existir una ley perfecta, pero desafortunadamente ante las condiciones de indefensión jurídica que padecemos los hondureños, la aplicación de la misma se desvanecerá en medio de los intereses de la elite de poder. La falta de independencia entre los poderes del Estado, ratificada por el golpe del 12-12-12, sumió al país en una dictadura civil, con un plan de nación

marcado por la entrega del territorio, yacimientos de hidrocarburos y los remanentes de los recursos forestales al capital extranjero.

El debate surgido alrededor de la denominada "Ley Mordaza", es una pugna entre los señores feudales "gobernantes" del país desde hace décadas. El fraude que se avizora en las próximas elecciones, obliga al partido nacional refrenar a los medios de comunicación que puedan criticar la imposición del candidato ungido como futuro presidente del país. La Expropiación Forzosa incluida en la ley, es una herramienta para acallar cualquier posible denuncia sobre el fraude que se cuece desde el Congreso Nacional para así lograr el continuismo y ejecutar mas libremente el plan de subasta del país, vendido por la actual administración como el plan de nación.

Para la OFRANEH conceder el beneficio de la duda a la administración Lobo sería un acto de traición a nuestro pueblo, ante el inminente peligro de perder gran parte de nuestro territorio a través de la inconstitucional Ley RED o Ciudades Modelo. Si hace dos años, desde CONATEL trataron de restringir las radios comunitarias, con la apertura del dial pretendido por Lobo, simplemente se dedicará el actual gobierno a otorgar frecuencias para radios "comunitarias" manejadas desde patronatos nacionalistas, oeneges de ultraderecha e incluso iglesias fundamentalistas.

Al final de cuentas, el problema con los borradores de la nueva Ley es mas político que de fondo jurídico

Firmado por OFRANEH, en <http://otramerica.com>

MÉXICO

EL PAÍS ESTÁ VENDIDO A LAS EMPRESAS; NO PUEDEN SER SOCIAS DEL GOBIERNO: ACTIVISTA

México está vendido a las empresas. Estas nunca deben ser socias en el diseño y aplicación de las políticas públicas, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, porque su único y verdadero interés es ampliar su participación en el mercado, advirtió Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra el Conflicto de Interés. En Inglaterra, dijo, desde los años 70 existe un boicot contra Nestlé por el daño que sus productos causan en la salud de la infancia. Allí (ese corporativo) no patrocina nada ni colabora en nada con el gobierno, pero es causa de alarma que se le acepte en países como México, señaló.

La activista participó en una conferencia convocada por El Poder del Consumidor, donde advirtió que las industrias de alimentos y bebidas se presentan agradables, amistosos y se dicen interesadas en ayudar, pero es mentira. En realidad bloquean a los gobiernos.

Su interés es evitar los controles a la venta de comida chatarra y a la publicidad, apuntó apenas unas horas antes de que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) formalizara un convenio de colaboración de Nestlé con la Cruzada Nacional contra el Hambre. Rundall recordó que Brasil también aceptó esa injerencia, aunque la movilización social logró terminarla.

De visita en México para difundir la importancia de que haya un regulación para prevenir los conflictos de interés, Rundall señaló que estaba a punto de felicitar al gobierno por lanzar la cruzada, pero enterarse del acuerdo con Nestlé y que un día antes se suscribió un convenio similar con PepsiCo fue una pésima noticia.

Y aún más que dicha participación consista en cursos sobre nutrición y autoempleo en las comunidades donde se desarrolla la cruzada. Advirtió que eso beneficiará a las trasnacionales, que podrán promover sus productos en forma de galletas, jugos u otras mercancías, a pesar de que carezcan de valor nutrimental.

Una verdadera estrategia para abatir desnutrición, obesidad y hambre tendría que estar volcada en promover alimentos tradicionales, favorecer la agricultura local e incluso los huertos familiares, señaló. Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, resaltó que acciones de este tipo ya han demostrado su efectividad en el país y comentó que desde Brasil llegó una advertencia, pues las

transnacionales buscarán, entre otras, que el acceso al agua potable se asegure, pero embotellada, es decir, venderla a las personas más pobres.

Eso es factible –dijo el activista– si Sedeso ya reconoció que mediante la red de tiendas Diconsa se distribuirán alimentos de mala calidad fabricados por las transnacionales. En cambio, las autoridades no dan señales de querer retomar la propuesta de la sociedad para que una parte del impuesto que se aplique a los refrescos, una octava parte, se invierta en llevar el líquido a todo el país, apuntó. De igual forma, Calvillo denunció que la cruzada del gobierno de Enrique Peña Nieto empezó sin haber creado el comité científico que debería avalar las acciones y, en cambio, sí hay prisa por formalizar el acuerdo de colaboración con la industria de alimentos y bebidas.

Rundall destacó que la coalición que preside tiene presencia en 20 países y Nestlé es la más boicoteada. En Inglaterra existe el convencimiento de que no debemos ser socios del enemigo, subrayó.

Tomado de La Jornada

NICARAGUA

CONTABILIZAN 17 MUJERES ASESINADAS EN EL 2013

Al menos 17 mujeres fueron asesinadas en Nicaragua en los tres primeros meses de este año, entre ellas cinco con edades entre 11 a 20 años, incluida una menor de 13 que, además, fue violada, denunció este miércoles una organización no gubernamental.

La Red de Mujeres Contra la Violencia, un organismo local, en un informe enviado a Efe advirtió que 10 de las 17 féminas fueron asesinadas en sus viviendas por sus esposos, novios, excompañeros sentimentales, familiares o conocidos.

De las 17 mujeres que han sido asesinadas en Nicaragua, una había denunciado ante las Comisarías de la Mujer de la Policía Nacional a su agresor por violencia intrafamiliar y amenazas de muerte, aceptó una medicación y luego fue asesinada, criticó esa ONG.

"La niña de 13 años tenía un año de ser víctima de violación por parte de su tío político. Tenía denuncia en la Comisaría de la Mujer, estaba prófugo de la justicia, llegó a la vivienda de la menor, la violó y la obligó a tomar (una) pastilla de curar frijoles (plaguicida)" para quitarle la vida, señala ese organismo en el informe.

Otras dos mujeres nunca denunciaron que fueron víctimas de violencia intrafamiliar, a pesar que la sufrían; otras dos que trabajaban en un bar "fueron salvajemente asesinadas"; y otra joven fue emboscada por desconocidos quienes la violaron y asesinaron.

Cinco fueron asesinadas por desconocidos; otras dos por sus vecinos y tres para robarles. Asimismo, la Red alertó que, de las 17 mujeres, 13 fueron asesinadas "por hombres con quienes la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia".

Ese organismo indicó que hay ocho hombres detenidos por homicidios contra mujeres, de los cuales dos ya fueron condenados a la pena máxima de 30 años; mientras que otros dos se quitaron la vida y el resto están prófugos.

Desde junio del año pasado entró en vigor en Nicaragua una ley que castiga la violencia hacia las mujeres, que tipifica el "femicidio" como el delito que comete el hombre que dé muerte a una mujer, en público o en privado, como resultado extremo de la violencia.

Esa ley también castiga diversos tipos de maltrato, como el físico, psicológico, sexual y patrimonial. La norma impone hasta 30 años de prisión, la pena máxima, a los hombres que ejercen violencia sobre las mujeres.

Durante 2012 fueron asesinadas 85 mujeres, según cifras de esa ONG.

Informa: Radio La Primerísima

PANAMÁ

NUEVA LEY VENDERÍA LAS FUENTES DE AGUA

El proyecto de ley N° 573 que pretende reformar la producción y distribución del agua potable reposa en la Asamblea de Diputados desde fines de febrero de 2013.

El proyecto está lleno de ambigüedades y contradicciones que hace sospechar que tiene un objetivo muy ajeno a los mejores intereses de los hogares de casi un millón de consumidores panameños. Según el artículo 3 del proyecto de ley, el agua puede considerarse un bien público y también puede considerarse todo lo contrario. El artículo del mencionado proyecto dice textualmente que “el agua pertenece al Estado y éste establecerá las políticas para su uso y explotación”. También dice que “fijará las prioridades para la explotación y uso de este recurso”. Agrega que “la (nueva) Autoridad del Agua podrá desarrollar las actividades que sean necesarias para la protección de aquellos recursos hídricos que sirven de fuente de agua cruda para el suministro de la población”. Significa que la Autoridad podrá ceder en concesión o enajenar las fuentes de agua cruda. En otras palabras, no se privatizará el IDAAN o el ente que la reemplace. Sin embargo, se podrá privatizar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El IDAAN o la nueva Autoridad compraría el líquido proveniente de las fuentes de agua. El proyecto de ley que está a la espera de su debate también sugiere que la distribución del agua puede ser externalizada. En la actualidad, entidades gubernamentales externalizan sus actividades a empresas de confianza que son registradas días antes exclusivamente para recibir la concesión.

En el artículo 2 del proyecto se divide el servicio de abastecimiento de agua potable en dos partes. Por un lado, todo lo referente a la producción de agua potable. Por el otro, la distribución del agua. La producción tiene tres fases. La primera fase comienza con “la captación de aguas superficiales o subterráneas”. La segunda continúa con “la potabilización del agua cruda”. La tercera fase se refiere a “la conducción principal de agua cruda o tratada, hasta los límites de las áreas de consumo”. La cuarta fase – correspondiente a la distribución - consiste en “la conducción del agua dentro de las áreas de consumo, hasta la entrega en el inmueble del cliente”. Por último, la quinta fase se refiere a “la comercialización del agua a los clientes”.

El proyecto de ley incluye en esta fase de la distribución una mención especial a la “distribución de agua potable a través de cisternas y otros”. Es decir, el gobierno a través del proyecto de ley en forma irresponsable no tiene intenciones de poner fin a esta práctica resultado de urgencias sociales con un buen plan para que todos los hogares del país tengan acceso al agua potable dentro de las paredes de su vivienda.

En total, el abastecimiento de agua tiene 5 fases. En el pasado reciente, 4 de estas etapas no han podido ser convertidas en actividades lucrativas. La segunda fase correspondiente a la ‘potabilización’ – mencionada más arriba - requiere de un servicio permanente de mantenimiento técnico. Cuando se sacrifican aspectos vitales de este servicio para favorecer los márgenes de lucro (ganancias) se producen las crisis que la ciudad de Panamá ha conocido en forma permanente en los últimos 20 años. Los empresarios (extranjeros y nacionales) sitúan su margen de ganancia en aproximadamente un 30 por ciento. Como no pueden subir el precio del agua por la estructura del mercado local, tienden a rebajar la calidad del servicio provocando ‘accidentes’ y desabastecimiento. Como consecuencia de la falta de capacidad técnica, aparentemente los empresarios han abandonado su interés en ‘privatizar’ esta fase de la producción de agua potable.

La tercera etapa - la conducción del agua hasta los límites de las áreas de consumo - no ofrece un margen de ganancia para el sector privado. Por lo tanto no muestran interés en su privatización. La cuarta fase es un problema social que el Estado no quiere resolver. Se niega a ofrecer a todas las familias acceso al agua potable en sus viviendas. Casi la mitad de las viviendas en el área metropolitana de la ciudad de Panamá no tiene agua. Buscan el agua en ‘plumas’ comunales, esperan la visita del camión cisterna o se resignan a recoger aguas de lluvia. Privatizar esta fase es un dolor de cabeza.

La quinta y última fase, correspondiente a la ‘comercialización’ es otro problema. Un porcentaje muy elevado de los usuarios – especialmente en las afueras de la ciudad - no paga el servicio debido a la pobre calidad. Externalizar la cobranza tendría un costo político muy alto.

La primera fase, que corresponde a “la captación de aguas superficiales o subterráneas”, presenta la única opción para privatizar. Es decir, vender o concesionar las fuentes de agua en las cabeceras de los ríos.

El proyecto de ley no se refiere al estudio de las fuentes de agua existentes, ni a las demandas de agua a corto, mediano y largo plazos. El proyecto de ley sólo le preocupa cómo garantizar que la producción y distribución de agua potable sea un buen negocio y genere ganancias para quienes inviertan en el sector.

Informa: Marco A. Gandásegui, hijo en <http://alainet.org>

VENEZUELA

AHORA, ¿CHAVISMO SIN CHÁVEZ?

Desde hace más de una década, en América Latina transitamos un nuevo momento histórico, el de la búsqueda de los caminos para superar el neoliberalismo. Venezuela, de la mano de Hugo Chávez, fue vanguardia y creó condiciones y estimuló que otros se animaran. Este domingo, el pueblo venezolano, consciente de que su sui generis revolución pacífica y democrática es un proceso de largo aliento, le dio a Chávez, quizá, su triunfo más grande.

Respiramos más tranquilos en América Latina, cuando el Consejo Nacional Electoral, casi a la medianoche, anunció un ajustado triunfo chavista por apenas una diferencia del 1,6%.

Aunque sin Chávez-locomotora, el proceso de integración regional, basado en la complementación y la solidaridad, que impulsara el gobierno bolivariano en la última década, seguirá seguramente el mismo derrotero.

Y comenzamos la era sobre la que tantos especularon: no se trata del pos-chavismo, sino del pos-Chávez. Nicolás Maduro, exdirigente sindical, será el presidente hasta 2019, e inaugura el período con un gran signo de interrogación: ¿se profundizará política y socialmente el proceso o se institucionalizará, lo que significa negociar con la oposición e incluso con Washington?

Nadie tiene dudas: Maduro no es Chávez y dentro del bolivarianismo hay sectores conservadores, decididos a seguir haciéndole concesiones al capitalismo y obviando el protagonismo popular y el poder comunal. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es más una maquinaria electoral que un usina de ideas y/o planes para la construcción del socialismo.

Mucho se ha hablado de los planes de desestabilización de la derecha, de una eventual intentona castrense-civil alentada por el aparato mediático nacional e internacional. El enemigo más temible está dentro del mismo gobierno solía decir Chávez, en la ineficacia, ineficiencia y la corrupción de gobernantes y funcionarios, sin capacidad de seguir buscando las soluciones propias a los problemas, más propensos a repetir formatos y modelos que se dice combatir.

El enemigo del bolivarianismo –que es el pueblo en la calle, mucho más allá de un mitin de campaña- está montado en una campaña de inteligencia y desestabilización económica, de división del aparato y de los cuadros chavistas, de forma de terminar con el proceso creador y revolucionario de la participación popular, quizá con la excusa del pragmatismo, de “lo posible” y, ahora también, de la escasa diferencia de votos entre el candidato bolivariano y el derechista.

Para construir el socialismo bolivariano del siglo XXI, es necesario identificar las raíces originarias del actual sujeto revolucionario, el pueblo venezolano que desmontará las estructuras objetivas de la dominación capitalista y el despotismo neoliberal vernáculo, señala el historiador y antropólogo Mario Sanoja.

La base para construir una sociedad socialista está conformada por los colectivos sociales, el Poder Popular, los cuales deben ser capaces de participar protagónica y conscientemente en la construcción de dicha sociedad y -en consecuencia- en las luchas para derrotar la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, el individualismo y el egoísmo que son los antivalores sobre los cuales se sustenta el sistema capitalista y el despotismo neoliberal.

Para que el proceso bolivariano logre sus objetivos, es necesario contar primero con la solidaridad, la fidelidad y la conciencia revolucionaria de todos o de la gran mayoría de los colectivos sociales.

Para ello es preciso no solamente diseñar políticas públicas destinadas a mejorar el nivel de vida de la población en todos sus aspectos, sino crear también una nueva hegemonía cultural, un imaginario socialista bolivariano que permita a los hombres y mujeres comprender que lo que se les da no es una dádiva o una limosna, sino su parte, agrega el maestro Sanoja.

Chávez dejó el plan de gobierno para el sexenio siguiente. Él construyó los cimientos del socialismo bolivariano. Ahora, la tarea de sus sucesores será levantar el edificio y para ello es imprescindible la participación popular.

[Aram Aharonian-Rebelión](#)